



OPINIÓN

México: poder en busca de rumbo

Por Félix Estrada

México atraviesa un periodo de calma aparente. Las cifras oficiales muestran una economía estable, un gobierno con amplio respaldo político y una sociedad que, en su mayoría, mantiene confianza en la conducción del país. Sin embargo, bajo esa superficie se perciben signos de agotamiento institucional y de pérdida de dirección estatal. En los ámbitos económico, político y social, el país enfrenta un proceso de estancamiento que amenaza con prolongar la inercia y reducir su capacidad de transformación.

En materia económica, el crecimiento previsto para 2025 ronda el 0.7 %, según la OCDE, mientras el Fondo Monetario Internacional estima un déficit fiscal de 4.5 % del PIB, el más alto en una década. La inflación se mantiene cercana al 4 %, y el empleo formal avanza con lentitud frente al crecimiento de la población económicamente activa. Más de la mitad de los trabajadores —alrededor del 55 %— se mantiene en la informalidad, sin derechos laborales ni protección social. La inversión privada disminuyó 2.3 % en el primer semestre del año y la inversión pública, concentrada en grandes proyectos, no ha logrado detonar un nuevo ciclo de expansión productiva.

El discurso oficial enfatiza la estabilidad macroeconómica, pero los indicadores revelan una economía sin estrategia clara de desarrollo. Las exportaciones manufactureras siguen dominadas por corporaciones extranjeras y el contenido nacional apenas rebasa una cuarta parte del total. Las remesas, que alcanzaron en 2024 los 63 000 millones de dólares, constituyen un sostén esencial del consumo, pero también reflejan la falta de oportunidades internas. México no enfrenta una crisis aguda, pero sí un estancamiento estructural: crece poco, distribuye mal y depende en exceso de factores externos.

A este panorama se suma una tensión fiscal persistente. El gasto público se ha orientado principalmente a programas sociales y a proyectos de infraestructura emblemáticos, reduciendo el margen operativo del Estado. Las dependencias enfrentan restricciones que limitan su capacidad de acción: universidades, hospitales, centros de investigación y órganos judiciales operan con presupuestos mínimos. Más que un colapso, el país padece una administración exhausta, con planeación débil y escaso margen para impulsar políticas de largo plazo.

En el ámbito político, México vive una paradoja. Tras una elección que otorgó una amplia mayoría legislativa al partido gober-

nante, el poder se ha concentrado como pocas veces en la historia reciente. Sin embargo, esa fortaleza no se ha traducido plenamente en capacidad de ejecución. La nueva administración enfrenta tensiones internas, diferencias de visión y competencia entre grupos por el control de áreas estratégicas. Esa fragmentación ha ralentizado la toma de decisiones y debilitado la conducción general del gobierno. El Poder Judicial, renovado tras una profunda reforma, atraviesa un proceso de adaptación y redefinición de su papel en el nuevo marco institucional. El resultado es un Estado con autoridad política significativa, pero con debilidades técnicas y presupuestales que limitan su alcance.

El poder, firme en apariencia, carece todavía de una estrategia integral de desarrollo. La política se ha convertido en gestión cotidiana, más preocupada por administrar que por transformar. El exceso de centralización no se ha acompañado de una dirección unificada ni de objetivos verificables; se gobierna con legitimidad, pero sin una brújula compartida que traduzca el poder en resultados sostenibles.

La violencia, por su parte, continúa siendo un desafío estructural. En 2024 se registraron más de 30 000 homicidios dolosos, y el Instituto para la Economía y la Paz estima que el costo económico del crimen equivale a alrededor del 18 % del PIB. En regiones como Guerrero, Michoacán o Zacatecas, el control territorial sigue siendo motivo de disputa entre el Estado y organizaciones criminales. La inseguridad se ha vuelto un obstáculo directo para el desarrollo local y para la atracción de inversión productiva.

En lo social, el país resiste, pero sin un horizonte claro. Según el Coneval, el 29.6 % de la población vive en pobreza y el 6.8 % en pobreza extrema, a pesar del incremento sostenido del gasto social. Las desigualdades regionales permanecen profundas: mientras en el norte industrial una de cada seis personas es pobre, en el sur la proporción alcanza a dos de cada tres. El gasto público en salud

—aproximadamente 375 dólares por habitante— es inferior al promedio latinoamericano, y los servicios educativos enfrentan deterioro: en las pruebas PISA 2024, México ocupó el lugar 58 de 80 países, con rezagos en matemáticas y lectura.

La expansión del gasto social ha permitido aliviar la pobreza, pero no generar movilidad ni productividad. Una generación creciente de jóvenes enfrenta precariedad laboral y falta de perspectivas. Violencia, migración y desconianza son los síntomas visibles de un tejido social debilitado.

Aun así, el país conserva reservas de vitalidad. La sociedad mexicana ha mostrado una notable capacidad de adaptación, y en distintos ámbitos —comunidades locales, empresas tecnológicas, universidades públicas, cooperativas y proyectos de innovación regional— surgen iniciativas que buscan reconstruir el tejido productivo desde abajo. México conserva capital humano, recursos naturales y una posición geográfica privilegiada que podrían sustentar un nuevo ciclo de desarrollo si se lograra articular una estrategia nacional coherente. La esperanza no está agotada: requiere liderazgo, visión de largo plazo y la decisión de recuperar la capacidad estatal para planear y ejecutar.

México no está al borde del colapso, pero sí atrapado en una crisis prolongada de rumbo. La estabilidad actual es frágil porque descansa más en la administración que en el proyecto, más en el poder que en la dirección. Sin embargo, el país aún tiene la oportunidad de transformar esa estabilidad en una plataforma de reconstrucción. Si el Estado recupera su función de guía y coordinación, si se orienta la política industrial hacia el fortalecimiento del mercado interno y la innovación tecnológica, y si se reinvierte en educación, salud y ciencia, México podría iniciar un ciclo de crecimiento con equidad y soberanía.

En este contexto, el país se prepara para la revisión del T-MEC, proceso que definirá su posición económica en las próximas dé-



cadás. México llega con limitaciones, pero también con la oportunidad de replantear su papel en América del Norte. Si aprovecha el momento para exigir un trato equitativo, aumentar el contenido nacional y promover cadenas de valor con base tecnológica propia, podría convertir una negociación compleja en un punto de inflexión. La revisión del tratado será, más que un examen comercial, una evaluación de Estado: la medida de hasta dónde el país puede sostener su autonomía económica y redefinir su rumbo.

México no enfrenta un colapso, sino una encrucijada. Cada cifra y cada historia revelan un sistema que confunde estabilidad con progreso, pero también una sociedad que, pese al cansancio, sigue en pie. Mientras existan ciudadanos dispuestos a pensar, crear y resistir, habrá esperanza. La tarea es convertir esa resiliencia en proyecto: transformar la costumbre de sobrevivir en la voluntad de construir un futuro propio.

Tras una elección que otorgó una amplia mayoría legislativa al partido gobernante, el poder se ha concentrado como pocas veces en la historia reciente. Sin embargo, esa fortaleza no se ha traducido plenamente en capacidad de ejecución.

La nueva administración enfrenta tensiones internas, diferencias de visión y competencia entre grupos por el control de áreas estratégicas



Foto Cuartoscuro



Foto Cuartoscuro



Foto Cuartoscuro



Foto Cuartoscuro



Foto Cuartoscuro